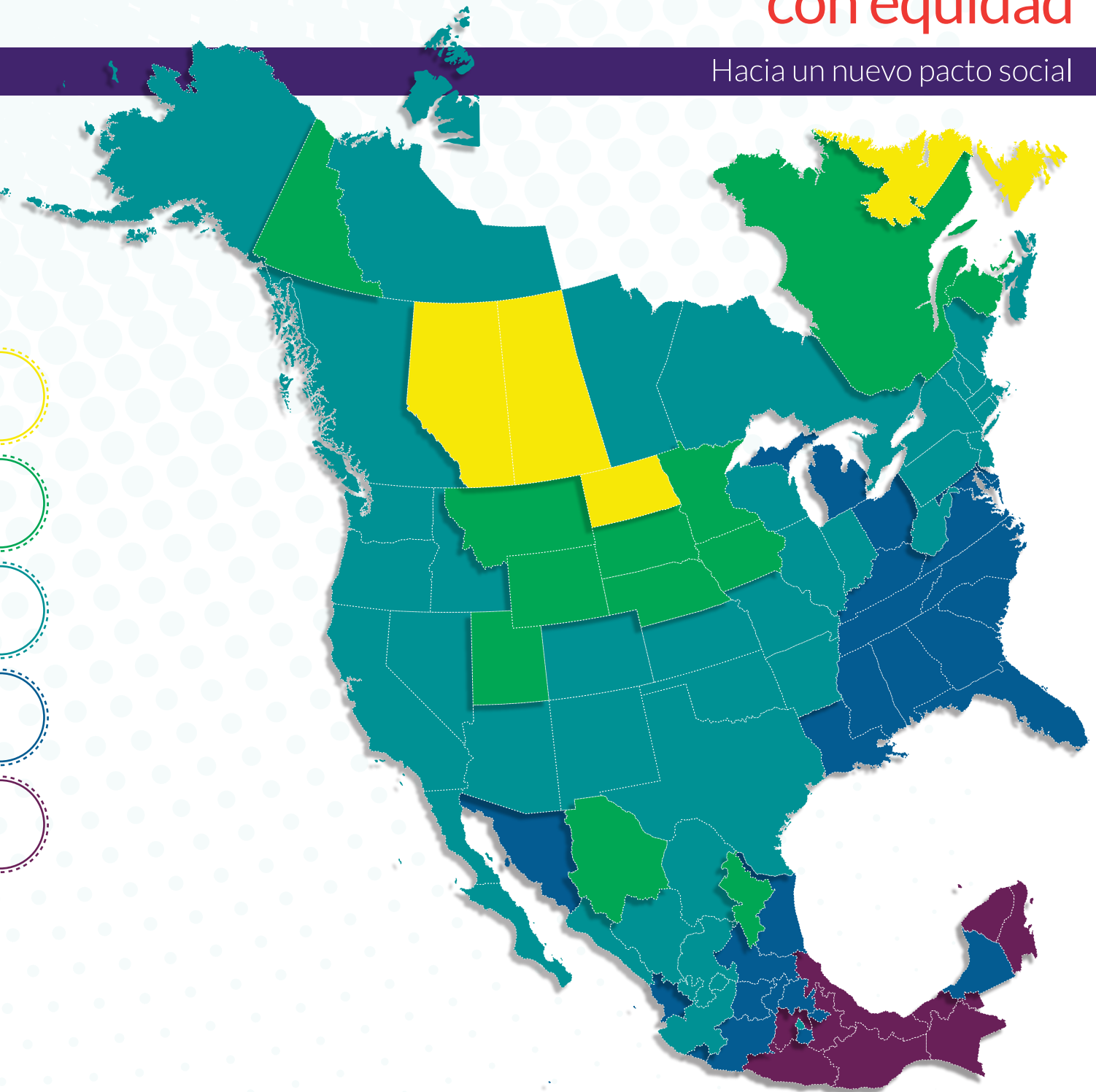


Bienestar con equidad

Hacia un nuevo pacto social



Bienestar con equidad

Hacia un nuevo pacto social



CONSEJO DIRECTIVO CEEY

Amparo Espinosa Rugarcía

Presidenta

Amparo Serrano Espinosa

Vicepresidenta

Julio Serrano Espinosa

Secretario

Manuel Serrano Espinosa

Tesorero

Roberto Vélez Grajales

Director Ejecutivo

Revisión editorial

Sara E. García Peláez Cruz

Diseño editorial

Rubén Escobedo

CEEY Editorial

© Centro de Estudios Espinosa Yglesias A. C.

Abasolo 152, Col. Del Carmen, Coyoacán,

Ciudad de México, C.P. 04100

Impreso en México

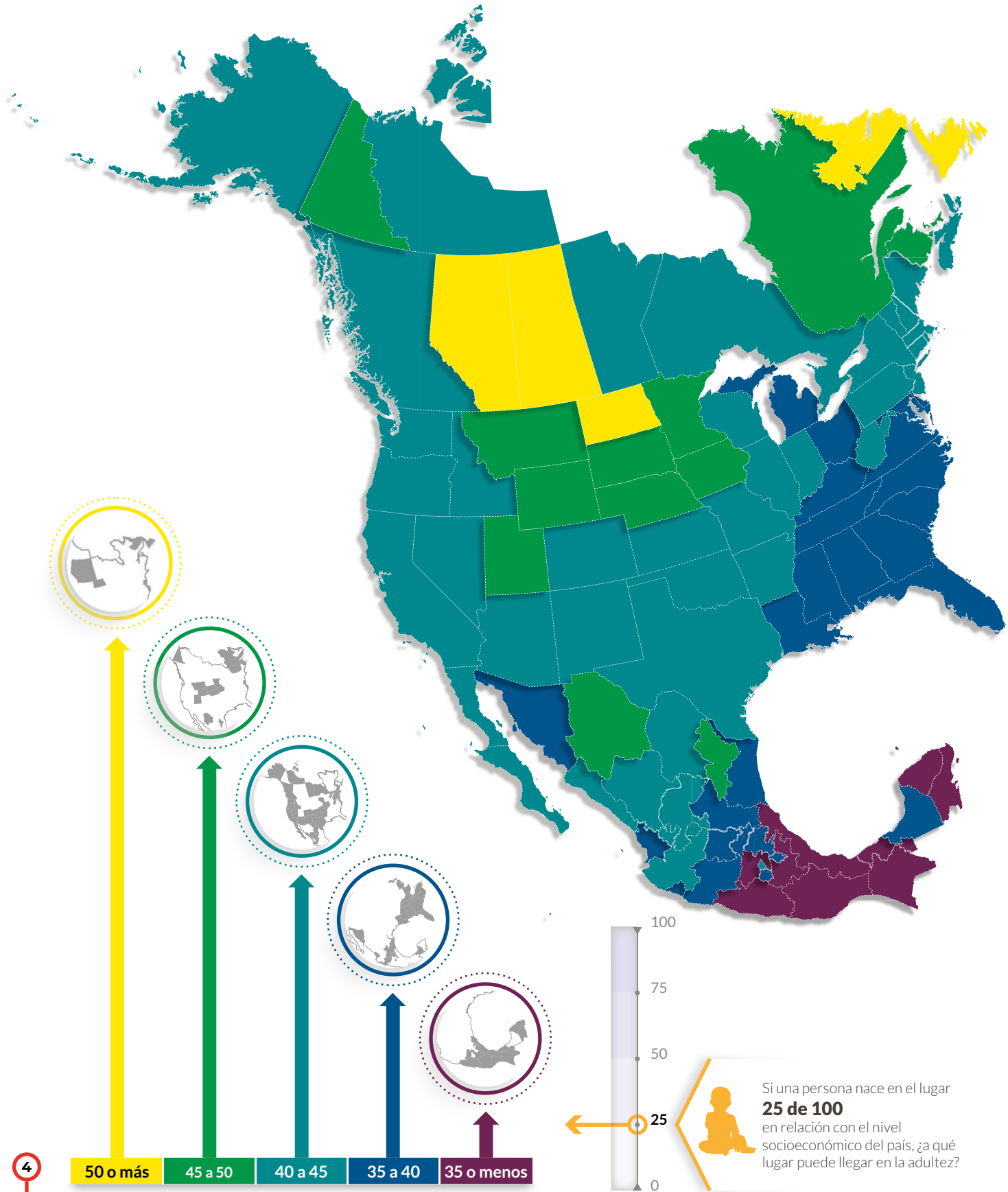
BIENESTAR CON EQUIDAD: HACIA UN NUEVO PACTO SOCIAL¹

Corre el siglo XXI y México aún no logra un Estado que garantice el bienestar y el acceso efectivo a los derechos sociales de las y los mexicanos. La movilidad social es baja y las desigualdades abismales. Estas, además, se perpetúan de una generación a otra por ausencia de oportunidades y bajo crecimiento. México tiene una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social, basado en la responsabilidad y la solidaridad. Solo así podrá ejecutar opciones de política pública que rompan las barreras estructurales para el desarrollo. Lograrlo requiere de mecanismos redistributivos efectivos y fiscalmente sostenibles.

Las características y determinantes de la desigualdad, de la baja movilidad social, y de las graves disparidades entre regiones, manifiestan la fractura social del país: los beneficios de la modernización económica y de la integración comercial se concentran en el norte, y en el sur, son inexistentes. La Ciudad de México y algunos estados del norte tienen niveles relativamente altos de movilidad social, pero en Chiapas, por ejemplo, los adultos ocupan peores posiciones en la escalera de riqueza nacional que sus padres. En estas condiciones es imposible vislumbrar el futuro de prosperidad compartida que necesitamos. Urge contar con un esquema de políticas públicas que garantice la ampliación e igualación de oportunidades para la población mexicana.

1. Esta nota fue redactada por Claudia Maldonado y revisada, discutida y editada por los autores de las investigaciones sobre las cuales se basa la presente. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y El Colegio de México elaboraron los correspondientes trabajos de investigación en el marco del proyecto sobre desigualdades en países emergentes y en desarrollo (Proyecto No. 60678), financiado por la Unión Europea (UE) y coordinado por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD). En México, el proyecto se denominó Desigualdad y movilidad social en México. El objetivo es entender en dónde estamos, dónde creemos que estamos, y qué tipo de sociedad quisiéramos tener en términos de desigualdad y movilidad social. Además, se discute qué tantos impuestos estaríamos dispuestos a pagar para construir la sociedad deseada. Para el análisis de los dos estudios se hace uso de información publicada por INEGI (Módulo de Movilidad Social 2016) y por el CEEY (Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2017 (ESRU-EMOVI 2017)), además de los datos obtenidos por una encuesta representativa a nivel urbano de casi 2,500 personas que se levantó en el año 2019. Los dos estudios resultantes, en los cuales se basa la presente nota, son: «Perceptions of Inequality and Social Mobility» de Raymundo Campos-Vázquez, Alice Krozer, Aurora Ramírez-Álvarez, Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez-Grajales; y «Social Mobility in Mexico, What Can We Learn from Its Regional Variation?» de Marcelo Delajara, Raymundo Campos-Vázquez y Roberto Vélez-Grajales. La edición final de la presente nota es de Sara E. García Peláez Cruz, del CEEY. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan la posición oficial de la UE, la AFD y de El Colegio de México.

MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE ABSOLUTA



Atender de manera prioritaria al sur del país para reducir desigualdades estructurales es una condición ineludible para impulsar la movilidad social y el bienestar con equidad. Para promover esta transformación, necesitamos intervenciones integrales, territorialmente diferenciadas, balanceadas entre generaciones, con enfoques de género y familia, y que tomen en cuenta también el ciclo de vida. Ello, a su vez, requiere de cambios institucionales de fondo que trasciendan a las administraciones gubernamentales.

Sin embargo, estas medidas son inviables con el pacto social vigente: se requiere construir un nuevo consenso en la sociedad con respecto a la recaudación y distribución de los recursos públicos. De ahí la importancia de conocer el sentir de la población en relación con los niveles de desigualdad y movilidad social, así como su percepción y disposición al pago de impuestos. En México, las personas preferirían ver niveles menores de desigualdad y mayor movilidad social, pero hay un desconocimiento de las necesidades fiscales para alcanzar estos objetivos. Lo anterior se refleja en una baja disposición general a pagar mayores impuestos. Para revertir esta situación, se requiere informar, transparentar y rendir cuentas sobre la Hacienda Pública.

México, país fracturado por la desigualdad y la baja movilidad social

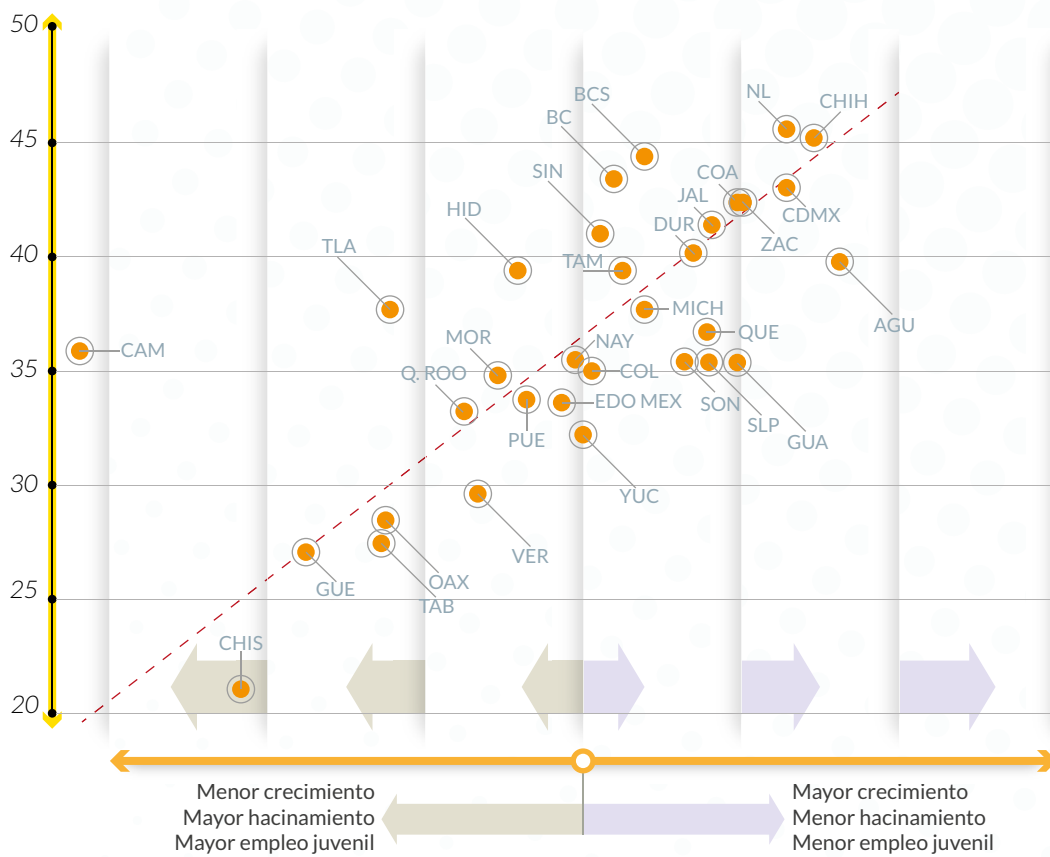
La desigualdad y la baja movilidad social, que a su vez se manifiestan en una pobreza visible y persistente, nos fracturan y nos frenan. Se trata de una injusticia que genera costos sociales y económicos para el país. México es un país de ingreso medio, pero con una de las distribuciones más desiguales del mundo. Esta situación se agrava en las diferentes regiones, pues hay una dispersión territorial marcada de norte a sur en el acceso a oportunidades y en el crecimiento económico. Esto, a su vez, obstaculiza la movilidad social.

Más del 60 por ciento de la desigualdad se transmite de una generación a otra. En los últimos 25 años, el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza no se ha reducido sustancialmente. De igual forma —y en términos de movilidad social— la cancelación de oportunidades de ascenso resulta pasmosa: la mitad de quienes nacen en los hogares más pobres permanecen en dicha condición, y únicamente una cuarta parte de ellos logra superar la línea de pobreza. De entre ellos, menos de tres de cada cien que nacen en los estratos más desaventajados logran alcanzar el extremo superior. Aunado a lo anterior, las opciones de movilidad social son distintas entre las regiones del país. En el sur las cifras son desalentadoras: 65 de cada 100 que nacen en el extremo inferior de la escalera social permanecen ahí durante la edad adulta; además, la posibilidad de ascender hasta el extremo superior es de casi la mitad que en el resto del país.

La baja movilidad social está íntimamente relacionada con la pobreza y la desigualdad. Las diferencias regionales en opciones de ascenso social se relacionan con temas como la tasa de desempleo juvenil, oportunidades escolares, la infraestructura en la vivienda y, por supuesto, el crecimiento económico. La distribución de

todo tipo de oportunidades durante el ciclo de vida es profundamente desigual a lo largo y ancho del país. Lo anterior apunta a barreras tempranas para la acumulación y total aprovechamiento del capital humano.

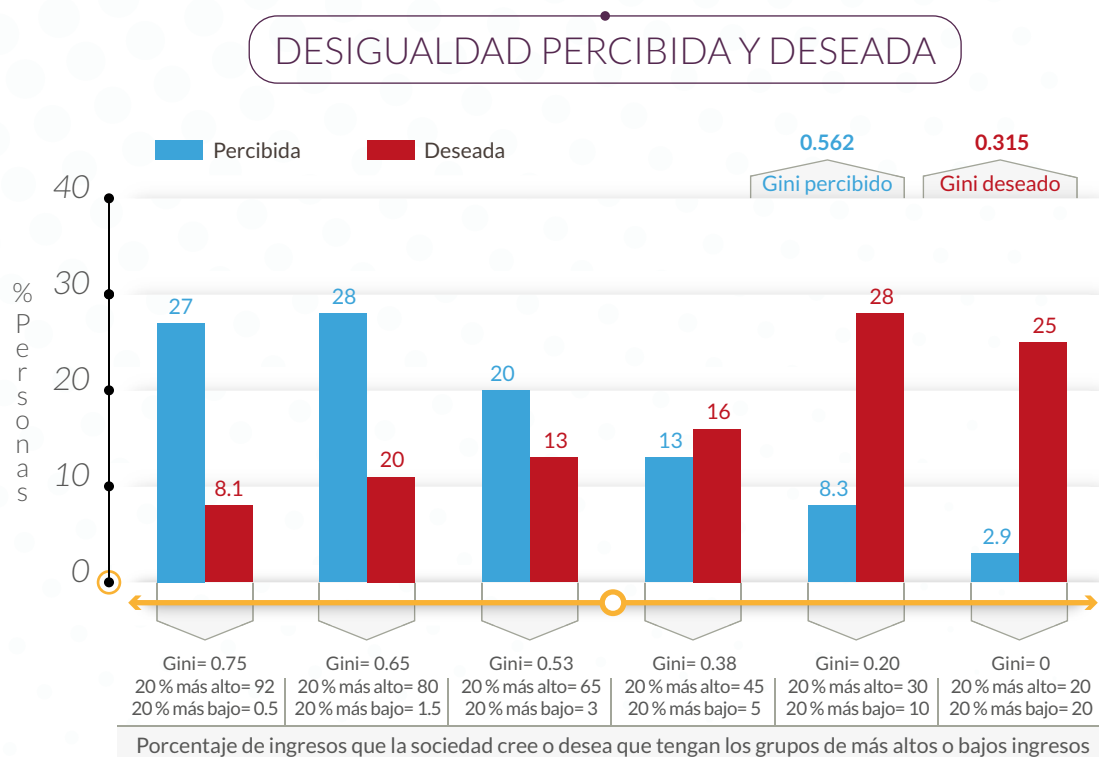
MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE ABSOLUTA



Los mexicanos aspiran a vivir en una sociedad con más oportunidades

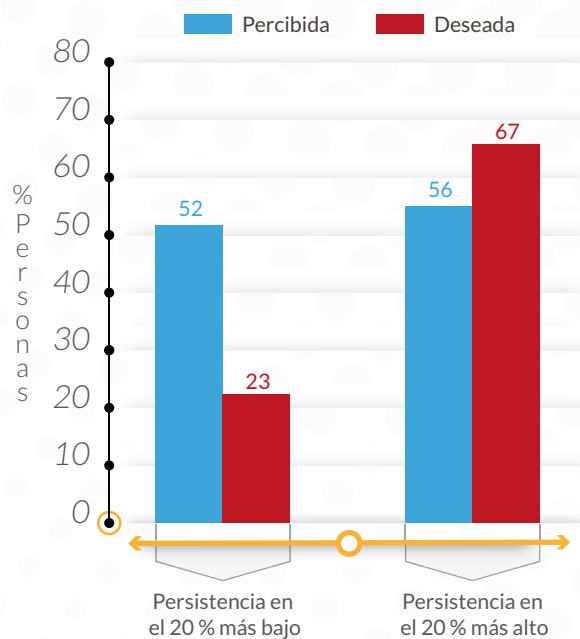
Aunque los mexicanos aspiramos a una sociedad más equitativa y con más oportunidades que la actual, en la práctica, aún ignoramos lo que implica construirla. De manera equivocada, solemos creer que existen suficientes oportunidades para ascender en la escalera socioeconómica, lo que se traduce en una actitud positiva —pero moderada— en el apoyo a medidas fiscales redistributivas.

Ahora bien, las percepciones que tenemos sobre los niveles de pobreza, desigualdad y movilidad social de una generación a otra sí se acercan a la realidad. No obstante, el porcentaje de personas ricas se sobreestima, pues se piensa que el 35 por ciento de la población se encuentra en dicho grupo. La posibilidad de llegar a ser rico (o de caer en pobreza) también se sobreestima. Lo anterior revela que, en general, los mexicanos creemos vivir en una sociedad con más oportunidades de movilidad social de las que realmente existen.



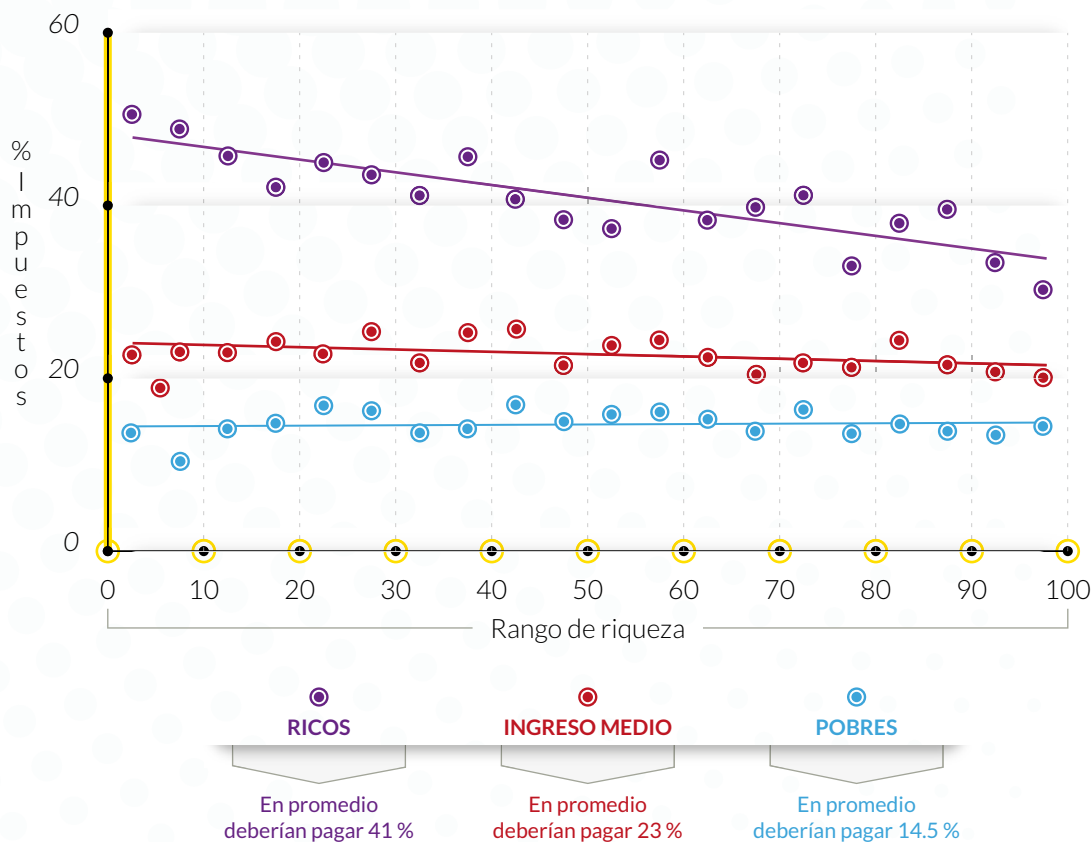
El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1.
 0 = Máxima igualdad (todos los individuos tienen los mismos ingresos).
 1 = Máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo individuo).

MOVILIDAD SOCIAL RELATIVA PERCIBIDA Y DESEADA



En cuanto a la percepción de lo que se paga de impuestos, existe una diferencia importante entre lo que se piensa que se paga (39 %), y lo que realmente se paga (22 %). Esta desconexión entre percepción y realidad, preocupa. Ahora bien, cuando se habla de preferencias en el tema redistributivo, asimismo hay sensibles brechas. Estas dependen de la posición socioeconómica de las personas: en general, los más desaventajados desean más igualdad y movilidad social. En cambio, los hogares que pertenecen a la parte alta de la escalera socioeconómica perciben una distribución más justa, por lo que, bajo su perspectiva, requieren menos esfuerzo de redistribución. Lo anterior implica que los estratos más favorecidos podrían vetar —o no apoyar— medidas redistributivas. Conocer y entender el peso y el efecto que las injusticias sociales pueden tener para todos, sin duda, facilitaría el apoyo de las medidas necesarias para producir bienestar con equidad.

DISTRIBUCIÓN IMPOSITIVA DESEADA



La sociedad desea más movilidad social y menor desigualdad, es un hecho, pero sin pagar muchos más impuestos. Lo anterior implica mejorar la comunicación con los ciudadanos. Resulta más que necesaria una comprensión de las características y composición de la base contributiva y la relación que esta guarda con la redistribución. Para lograrlo, se requiere adoptar medidas ambiciosas de transparencia fiscal: la población debe saber con claridad los impuestos e ingresos de diferentes grupos socioeconómicos en el país.

Un futuro de bienestar con equidad para todos

La realidad actual de México es que quien nace rico o pobre, muy probablemente vivirá en la misma condición el resto de su vida. Los mexicanos deseamos cambiar esa realidad: aspiramos a una sociedad más igualitaria y con mayor movilidad social, es decir, una en la que haya igualdad de oportunidades. Este es un mandato que no podemos postergar más. Como ya se mencionó, se requiere de una inversión social con un enfoque regional y de justicia entre generaciones que incorpore las dimensiones de género, familia y juventud. Lo anterior es posible si se garantiza un financiamiento sostenible de dicha inversión. Para lograrlo, se debe informar de manera clara y simple a la población sobre la magnitud de necesidades de la Hacienda Pública. A partir de ahí, con el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, y con la adecuada rendición cuentas, es posible alcanzar un pacto social sostenible en el tiempo. Los elementos mínimos para articularlo son:

- **Transparencia distributiva**

- La ciudadanía debe ser capaz de responder preguntas como: ¿cuál es mi ubicación en la escalera socioeconómica? ¿Cuál es la posición de los demás en la distribución socioeconómica? ¿Quién es quién en el pago de impuestos? ¿Cuál es el pago efectivo de impuestos por nivel de ingreso? ¿Cuántos impuestos pago? ¿Cuánto debería pagar para alcanzar el grado deseado de igualdad y movilidad social? ¿Cuánto cuesta acceder a mis derechos? ¿Cuánto debo pagar por vivir en un país más igualitario y con mayores opciones de movilidad social? ¿Qué beneficios conlleva el vivir en una sociedad así?

- **Transparencia institucional**

- Las reglas de operación de todos los programas públicos para el bienestar deben ser del todo claras y los mecanismos compensatorios deben ser explícitos en programas de inversión. Lo anterior para aumentar el conocimiento y la certeza con respecto al esfuerzo redistributivo.

- **Gobernanza abierta y participación social**

- Se deben construir espacios de planeación, monitoreo e interlocución con la sociedad civil organizada, con la iniciativa privada y con la academia para promover e incentivar la responsabilidad y la solidaridad hacendarias.

Un nuevo pacto social implica poner a la desigualdad y a la movilidad social en el centro de las preocupaciones políticas. Por lo tanto, resulta necesario repensar el esquema con la intención absoluta de ampliación e igualación de oportunidades. Este nuevo pacto social requeriría, en primer lugar, de una importante movilización de recursos públicos (gasto e inversión) compensatorios y territorialmente diferenciados, mismos que han de prestar especial atención al sur del país. Este esfuerzo se debe estructurar con medidas que busquen la reversión de todos los factores asociados con la ausencia de movilidad social. En este sentido, se deberá priorizar la inversión en

infancia temprana, planeación familiar, disminución de embarazo adolescente, vivienda e infraestructura social. Asimismo, se debe mejorar la calidad de la educación y la retención de los jóvenes en la escuela, en especial, en el nivel medio superior —decisivo para completar el ciclo educativo— y la promoción del empleo formal de calidad entre la población joven. Aunque las transferencias monetarias puedan constituirse en instrumentos importantes de la política social, estas deben darse bajo un esquema de políticas transversales que atienda, de manera integral, cuestiones como las señaladas anteriormente.

Construir un nuevo pacto social supone riesgos y desafíos mayores, pues al tiempo, se debe desarticular un sistema establecido. La mitad del camino está andado: la sociedad mexicana desea vivir en un país con mayor igualdad y mayores oportunidades para todos. Una comunicación clara y eficaz sobre las medidas necesarias para lograrlo constituye parte de ese camino, como también la voluntad política y la creación de medidas asertivas para hacerlo.